



**Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid**  
C/ Gran Vía, 19 , Planta 3 - 28013

45029720

NIG: 28.079.00.3-2019/0013101

**Procedimiento Abreviado 234/2019**

**Demandante/s:** D./Dña. [REDACTED]

LETRADO D./Dña. [REDACTED]

**Demandado/s:** AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA  
LETRADO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL

**SENTENCIA Nº 202/2019**

En Madrid, a 24 de septiembre de 2019.

El Ilmo. Sr. D. JESUS TORRES MARTINEZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 11 de MADRID ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo registrado con el número 234/19 y seguido por el procedimiento abreviado en el que se impugna la siguiente actuación administrativa: RESOLUCION DESESTIMATORIA PRESUNTA, DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS CORRESPONDIENTE A LA AUTOLIQUIDACION POR IMPORTE DE 12.414,14 EUROS, POR TRANSMISION DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE [REDACTED], ASÍ COMO LA PLAZA DE GARAJE ANEXA, EN CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Son partes en dicho recurso: como recurrente DON [REDACTED] Y DOÑA [REDACTED] representados por el Letrado DON [REDACTED] y como demandada AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, representado y dirigido por la Letrada DOÑA [REDACTED]

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Por el recurrente mencionado anteriormente se presentó escrito de demanda de Procedimiento Abreviado, contra la resolución administrativa mencionada, en el que tras exponer los Hechos y Fundamentos de derecho que estimó pertinentes en apoyo de su pretensión terminó suplicando al Juzgado dictase Sentencia estimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto.

**SEGUNDO.-** Admitida a trámite por proveído, se acordó su sustanciación por los trámites del procedimiento abreviado, conforme al procedimiento previsto en el apartado 3 párrafo 3º del art. 78 de la LJCA, introducido por la Ley 37/2011 de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, habiéndose solicitado por la representación de la Administración demandada en la contestación a la demanda sentencia desestimatoria.



**TERCERO.-** En este procedimiento se han observado las prescripciones legales en vigor.

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** En el presente recurso contencioso-administrativo la resolución desestimatoria presunta de la solicitud de devolución de ingresos indebidos correspondiente a la autoliquidación por importe de 12.414,14 euros, por transmisión del inmueble sito en la Calle [REDACTED], así como la plaza de garaje anexa, en concepto de IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

**SEGUNDO.-** La parte recurrente ejercita pretensión de nulidad de la actuación administrativa impugnada así como que se deje sin efecto la liquidación por no estar sujeta la operación ante la inexistencia del hecho imponible del IIVTNU, con devolución de las cantidades ingresadas.

Como principal motivo de impugnación de alega la falta de concurrencia del hecho imponible al haberse producido un decremento del valor de los terrenos ante la realidad del mercado como consecuencia de la crisis inmobiliaria.

Las defensas de la Administración demandada se oponen al recurso interpuesto e interesa su desestimación, planteando con carácter previo la inadmisibilidad del recurso ante la inexistencia de acto administrativo, en base a lo dispuesto en el art. 69 c) en relación con el art. 25.1 de la Ley de esta Jurisdicción, por cuanto la recurrente no ha agotado la vía administrativa.

**TERCERO.-** Atendiendo al orden procesal lógico procede abordar en primer término la alegación previa invocada por la Administración demandada y cuya estimación daría lugar a la declaración de inadmisibilidad de este recurso sin necesidad de entrar a conocer sobre el fondo del asunto.

El artículo 24 de la Constitución al establecer como derecho fundamental el de la tutela judicial efectiva, impone a su vez una interpretación restrictiva de las causas que vedan al órgano jurisdiccional realizar un pronunciamiento de fondo sobre la procedencia o improcedencia de reconocer y proteger los derechos e intereses legítimos que ante él se hacen valer; mas *“los Tribunales, en aplicación de las normas que regulan los presupuestos procesales de acceso a los recursos, deben procurar no incurrir en ningún exceso formalista que convierta a tales requisitos en obstáculos que impidan prestar la tutela judicial efectiva, sancionada en el artículo 24 de Constitución, pero también han de evitar caer en el exceso contrario que lleve a eliminar prácticamente los requisitos procesales legalmente predeterminados que regulan el acceso a los recursos, en garantía de los derechos tanto de los recurrentes como de los recurridos”*.

Dispone el art. 69.c) de la Ley 29/1998 de 13 de julio de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en relación con el art. 58 de dicha ley, que la sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso cuando “tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación”. Y añade el art. 25.1 de la misma Ley que “el recurso contencioso-administrativo es admisible en relación (...) con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de



trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos”.

El art. 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, redactado por el apartado 1 del artículo primero de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local («B.O.E.» 17 diciembre), dispone que: “*Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, y de los restantes ingresos de Derecho Público de las entidades locales, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, se formulará el recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Dicho recurso tendrá carácter potestativo en los municipios a que se refiere el título X de esta ley*”.

Conforme al referido precepto en los Municipios de Gran Población a que se refiere el título X de la Ley 7/1085 el recurso de reposición tiene carácter potestativo, pudiendo los interesados interponer bien el recurso potestativo de reposición que se contempla en el art. 14 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y frente a la resolución que recaiga interponer preceptivamente la reclamación económica administrativa, o bien interponer directamente reclamación administrativa ante el órgano especializado.

En el supuesto del Ayuntamiento de LAS ROZAS, la interposición del recurso de reposición frente a los actos de gestión de tributos locales resulta preceptivo, al no concurrir las circunstancias de municipio de gran población. Conforme se aprecia del expediente administrativo la parte recurrente no agotó la vía administrativa previa mediante la preceptiva interposición del recurso de reposición en materia tributaria por lo que concurre la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 51.1.c) de la Ley de esta Jurisdicción al encontrarnos ante la inexistencia de acto administrativo recurrible.

Sin perjuicio de lo expuesto cabe señalar que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, derogada por la vigente ley 30(2015 (de aplicación desde el día 2 de octubre de 2016), contenía una regulación extensa de la resolución administrativa o forma de terminación del procedimiento, disponiendo la obligación de resolver por parte de la Administración, sin perjuicio de la regulación de las consecuencia del silencio administrativo. Como señala la ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo, en ningún caso podrá la administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso aunque la resolución procedente pueda ser la inadmisión de la solicitud. El deber de dictar resolución expresa por parte de la Administración, congruente con la solicitud que se le efectúa, constituye una obligación administrativa –técnicamente inexcusable- STS 29/11/1989-.

**CUARTO.-** Sin que proceda imposición de costas en base a lo dispuesto en el art. 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa conforme a la redacción dada por la Ley de Agilización Procesal aprobada en fecha 22 de septiembre de 2011.

Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que, emanada del Pueblo Español, me concede la Constitución.



## FALLO

**PRIMERO.-** DECLARAR LA INADMISIBILIDAD DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 234 DE 2019, INTERPUESTO POR DON [REDACTED] Y DOÑA [REDACTED], REPRESENTADOS POR EL LETRADO DON [REDACTED] CONTRA LA RESOLUCION DESESTIMATORIA PRESUNTA, DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS CORRESPONDIENTE A LA AUTOLIQUIDACION POR IMPORTE DE 12.414,14 EUROS, POR TRANSMISION DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE [REDACTED] ASÍ COMO LA PLAZA DE GARAJE ANEXA, EN CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

**SEGUNDO.-** SIN EXPRESA IMPOSICIÓN SOBRE LAS COSTAS CAUSADAS EN ESTA INSTANCIA.

Contra la presente resolución no cabe recurso

— Así lo acuerda, manda y firma el el/la Ilmo/a Sr/a. D./Dña. JESÚS TORRES MARTÍNEZ Magistrado/a-Juez/a del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de los de Madrid.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

